

Responsabilidad y democracia reales

Juan-Felipe Carrasco, Greenpeace

Respuesta de Greenpeace al artículo

[Ciencia democrática, política responsable](#),

publicado en El País el día 26 de marzo de 2008

El artículo del Sr Josep M. Casacuberta que su periódico publicó el pasado 26 de marzo *Ciencia democrática, política responsable* contiene a nuestro juicio elementos muy interesantes y certeros. Estamos absolutamente de acuerdo con el hecho de que necesitamos urgentemente una ciencia independiente del poder financiero y político. Pero discrepamos radicalmente con el Sr Casacuberta cuando afirma que no existen estudios científicos rigurosos que avalen la peligrosidad de los transgénicos.

Cuando cada vez más datos científicos avalan la peligrosidad de determinados Organismos Modificados Genéticamente (OMG), lo que precisamente no hay son pruebas de la inocuidad de los mismos para el medio ambiente y para la salud. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, la Agencia de la cual es miembro el señor Casacuberta) y el Gobierno español deberían aplicar el principio de precaución en lugar de parapetarse detrás de una visión que solamente beneficia a un puñado de transnacionales.

Si ir más lejos, la decisión que en el mes de enero tomó el Gobierno francés de prohibir el cultivo del maíz transgénico de Monsanto, o la que ayer tomó el Gobierno Rumano en el mismo sentido, se basan en el gran número de nuevas evidencias científicas que muestran algunas de las consecuencias de los maíces transgénicos sobre el medio ambiente y la salud.

Recientemente España apoyaba la aprobación por parte de la UE de una patata transgénica de la multinacional BASF, mientras ésta era rechazada por una amplia mayoría de estados miembros. En 2004, la EFSA afirmó que debían ser prohibidos todos los OMG que llevaran determinados genes de resistencia a antibióticos, entre ellos esta patata. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia Europea del Medicamento o la Unidad de Agentes Antibacterianos del centro de investigaciones médicas Institut Pasteur de París corroboraron esta postura. Sin embargo, la EFSA ha ignorado estas posturas, ha cambiado de opinión y ha decidido apoyar la patata transgénica de BASF.

Recientemente en Bruselas, el Comisario Europeo de Medio Ambiente ha propuesto la prohibición de dos maíces transgénicos (Syngenta Bt11 y Pioneer/Dow 1507), basándose en las evidencias científicas de los daños ambientales que estos cultivos pueden producir.

En 2007, un grupo de expertos del Departamento de Ingeniería Genética de la Universidad de Caen, Francia, publicó en la revista científica *Archives of Environmental Contamination and Toxicology* un estudio en el que se demostraba que las ratas de laboratorio alimentadas con el maíz transgénico MON 863 de Monsanto mostraba signos de toxicidad en el riñón y en el hígado, desaconsejando su consumo por mamíferos.

Un reciente informe demuestra la alta variabilidad del contenido de una toxina insecticida presente en los maíces MON 810 (el maíz transgénico cuyo cultivo el Gobierno español tolera), así como la gran diferencia entre la realidad y los niveles ofrecidos por Monsanto cuando solicitó la autorización para comercializar este maíz. Estos datos arrojan nuevas incertidumbres y preocupaciones con respecto a la seguridad y la calidad del maíz transgénico, y ponen en entredicho el sistema de autorizaciones de la UE.

Precisamente, hablando de democracia y de responsabilidad, ¿por qué las empresas de los transgénicos, sus científicos y sus políticos, siguen ocultando los constantes casos de contaminación genética que se dan en España? ¿Por qué el Gobierno del PSOE las protege? ¿Por qué no se ha puesto en marcha el mecanismo de trazabilidad de los alimentos que permita garantizar la libertad de elección de los productores y de los consumidores? ¿Por qué la legislación de etiquetado (una de las garantías de una verdadera democracia) es engañosa y poco fiable?

Greenpeace no se opone a la investigación, ni a las aplicaciones médicas de la ingeniería genética, siempre que éstas se realicen en ambientes confinados. Nos oponemos a la liberación de estas aberraciones biológicas al medio ambiente, a la naturaleza. Frente a las promesas de la industria de los transgénicos, la realidad se conjuga en términos de constantes contaminaciones genéticas, daños ambientales y riesgos para la salud. El Gobierno debe tomar nota de la oposición social y seguir el ejemplo de países como Austria, Hungría, Francia o Rumanía, reconsiderar la apuesta transgénica y orientar la agricultura española hacia soluciones ambiental y socialmente sostenibles. Para ello el primer paso es prohibir cautelarmente el único transgénico autorizado para cultivo en la UE, el MON 810, tal y como han hecho los principales países productores de maíz de la UE.